

lo que dispone la Ley, ni es conforme a su espíritu" (Auto TS de 9 -7 -1998).

3º.- RETROACCIÓN DE ACTUACIONES.-

Admitir la retroacción de las actuaciones, resultando que los recurrentes ya han tenido conocimiento de estas actuaciones del expediente, cuya falta de notificación alegan, habiendo interpuesto una impugnación al mismo, y teniendo la posibilidad de interponer recursos, -al haber solicitado la nulidad del expediente y reabrir, por este medio, la vía de recursos a unos actos que ya eran firmes-, supondría ir en contra del principio de "economía procesal", cuya aplicación ha reconocido el TS en su Jurisprudencia (S. de 2 -4 -1984, S. de 16 -12 -1998, S. de 29 -6 -1999, S. de 16 -11 -1999). Por los mismos motivos, la pretendida anulación sería contraria, igualmente, al principio "pro actione", también recogido en la Jurisprudencia del TS (S. de 27 -1 -1999, Ss. de 17 y 23 -10 -1991, S. de 5 -6 -1993, 26 -3 -1994, 18 -6 -1994, S. de 19 -7 -1997).

A mayor abundamiento, resultaría que, al anular las actuaciones y retrotraer el expediente, habrían de reproducirse actos que no podrían ordenarse en el momento actual ya que serían actos de contenido imposible. Así, el Decreto por el que se declara la ruina inminente, -cuya nulidad se pretende, bajo pretexto de no haber sido notificado-, no podría reproducirse porque la ruina es un hecho físico y porque en aquel se ordenaba la demolición del inmueble, que ya se ha producido, siendo imposible declarar ahora la ruina inminente de un edificio que ya no existe.

4º.- RUINA INMIENENTE Y DEFECTOS FORMALES.-

Como ya se ha expuesto en el apartado 2º, sólo se alega en el recurso un defecto de forma: la falta de notificación del Decreto por el que se declara la ruina inminente del inmueble propiedad del recurrente y el resto de actuaciones del expediente. Sobre este aspecto concreto, se aporta Jurisprudencia del Tribunal Supremo exponente de su doctrina sobre la incidencia de los defectos de forma en los supuestos de ruina inminente o de aquellos en los que se precisa una actuación urgente de la Administración para evitar daños a personas y bienes:

STS de 17 mayo 1983 (Ar. 3355):

"CDO.:.- Que, ante esta situación de peligro para las personas y comprobada urgencia de las otras de

reparación ordenada, resulta inadecuada cualquier invocación de defectos, formales o de procedimiento, porque, como acertadamente se razona en la Sentencia apelada, es indiscutible que, en tales casos, la Autoridad Municipal está legalmente autorizada para adoptar las medidas que estime oportunas, con arreglo a lo prevenido en los arts. 181 y siguientes de la Ley del Suelo."

STS de 8 mayo 2002 (Ar. 4921):

"CUARTO.- ...la sentencia recurrida, precisamente, en su fundamento cuarto de derecho, expone con toda claridad, que con base a lo previsto en el artículo 183 de la Ley del Suelo de 1976, dada la declarada inconstitucionalidad del artículo 247.1 de la Ley del Suelo de 1992 (sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997), y los artículos 21 j) de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística, los Alcaldes pueden adoptar, en casos como el presente, las medidas necesarias para garantizar la prevención de daños a personas y bienes, "aun sin audiencia de la propietaria", pues la situación de ruina inminente de edificio que ofrece deterioro que hace urgente su demolición, con peligro para personas y cosas, faculta para no seguir el expediente ordinario de ruina, sin audiencia de los interesados.

QUINTO.- Los motivos primero y tercero, realmente inciden en el mismo planteamiento argumental, sobre la falta de audiencia o requerimiento para demoler, al interesado, y ambos han de ser desestimados, al no apreciarse la vulneración de los preceptos considerados como infringidos, por la parte recurrente.

SEXTO.- El Acuerdo fue notificado a la propietaria como la misma reconoce en su demanda que no residía en la localidad donde se ubica el inmueble, habiéndose de proceder de modo inmediato al derribo del inmueble, dada la máxima urgencia derivada del peligro existente para personas y cosas, y puesta de relieve en el informe del técnico municipal.

El artículo 183.1 de la Ley del Suelo de 1976, autoriza el derribo de un inmueble en estado ruinoso previa audiencia al propietario y moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.